

Índice AI: PRE01/116/2013
11 March 2013

Irak: Se sigue pagando un alto precio tras una década de abusos

Diez años después de la invasión encabezada por Estados Unidos que derrocó al brutal régimen de Sadam Husein, Irak continúa enredado en un sombrío círculo de abusos contra los derechos humanos, que incluyen ataques contra civiles, tortura de detenidos y juicios injustos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy.

Una década de abusos saca a la luz una cronología de tortura y otros malos tratos a detenidos a manos de las fuerzas de seguridad iraquíes y tropas extranjeras tras la invasión de 2003.

También pone de manifiesto el incumplimiento continuado por parte de las autoridades iraquíes de su obligación de proteger los derechos humanos y respetar el Estado de derecho ante los persistentes y mortales ataques de grupos armados, que muestran un cruel desprecio por la vida civil.

“Diez años después del final del régimen represivo de Sadam Husein, muchos iraquíes disfrutan hoy de mayores libertades que bajo aquel régimen baasista, pero es evidente que los avances fundamentales en materia de derechos humanos que deberían haberse alcanzado durante el último decenio no se han materializado”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Ni el gobierno iraquí ni las antiguas potencias ocupantes han cumplido las normas a las que están obligados por el derecho internacional, y la población de Irak sigue pagando un alto precio por ese incumplimiento.”

La tortura es una práctica generalizada e impune de las fuerzas de seguridad gubernamentales, especialmente contra personas detenidas en virtud de la legislación antiterrorista, que son torturadas mientras permanecen recluidas en régimen de incomunicación para interrogatorio.

Los detenidos han denunciado haber sido torturados para obligarlos a “confesar” delitos graves o incriminar a otros mientras permanecían recluidos en esas condiciones. Muchos se han retractado de sus confesiones durante el juicio, sólo para ver cómo los tribunales las admiten como prueba de su culpabilidad sin investigar sus denuncias de tortura, y los condenan a largas penas de prisión o a muerte.

Para agravar aún más la injusticia, las autoridades han hecho comparecer a detenidos en conferencias de prensa o han organizado la retransmisión de sus “confesiones” en la televisión local antes de su juicio o de que se dictara su sentencia, lo cual constituye una flagrante violación de la presunción de inocencia y del derecho de todo acusado a recibir un juicio justo.

La pena de muerte se suspendió tras la invasión de 2003, pero fue restaurada rápidamente por el primer gobierno iraquí a su llegada al poder, y las ejecuciones se reanudaron en 2005.

Desde entonces, al menos 447 presos han sido ejecutados, entre ellos el propio Sadam Husein, algunos de sus principales colaboradores y varios presuntos miembros de grupos armados.

Cientos de presos aguardan a ser ejecutados. Irak, que en 2012 ahorcó a 129 presos, es ahora uno de los países que más ejecuciones llevan a cabo.

“Las condenas de muerte y las ejecuciones se utilizan en una escala atroz”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui. “Resulta especialmente abominable que muchos presos hayan sido condenados a muerte tras juicios injustos y sobre la base de confesiones que, según afirman, fueron obligados a realizar bajo tortura.”

“Ya es hora de que las autoridades iraquíes pongan fin a este espantoso círculo de abusos y declaren una suspensión de las ejecuciones, como primer paso hacia la abolición de la pena de muerte para todos los delitos.”

Desde diciembre, miles de manifestantes han tomado las calles en zonas donde los musulmanes suníes son mayoría, para protestar contra las detenciones arbitrarias, los abusos a detenidos y el uso de la legislación antiterrorista, y para pedir el fin de lo que consideran una discriminación gubernamental contra la población suní.”

Mientras tanto, grupos armados suníes siguen atacando no sólo objetivos gubernamentales, sino también a civiles chiíes, incluidos peregrinos religiosos.

Aunque la región semiautónoma de Kurdistán, en el noreste de Irak, ha permanecido relativamente libre de la violencia que ha devorado el resto del país, los dos partidos políticos kurdos que la gobiernan mantienen un férreo control del poder, y también se han denunciado casos de abusos contra detenidos.

“La destitución de Sadam Husein en 2003 debería haber venido seguida de un proceso de reforma fundamental de los derechos humanos, pero las fuerzas ocupantes, casi desde el primer día, empezaron a cometer torturas y otros abusos graves contra prisioneros, como demostraron gráficamente el escándalo de Abu Ghraib en el que se vieron implicadas fuerzas estadounidenses, o la muerte a golpes de Baha Mousa bajo la custodia de soldados británicos”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui.

En Reino Unido y Estados Unidos, pese a las investigaciones sobre casos individuales, no se han investigado sistemáticamente las violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas por fuerzas de ambos países, ni se ha hecho rendir cuentas a los responsables en todos los niveles. Las víctimas iraquíes de violaciones de derechos humanos cometidas por estadounidenses han visto bloqueada la vía para pedir reparación en los tribunales de Estados Unidos.

Las autoridades iraquíes han reconocido periódicamente casos de tortura y otros malos tratos, pero en general han tratado de restarles importancia señalándolos como sucesos aislados o, en unos pocos casos destacados, han anunciado investigaciones oficiales cuyos resultados, si es que los ha habido, nunca se han revelado.

Sin embargo, tal como muestra el informe de Amnistía Internacional, la tortura y otros abusos a detenidos han sido una de las características más persistentes y generalizadas del panorama de derechos humanos de Irak, y el gobierno ha mostrado poca disposición a reconocer su alcance o a tomar las medidas necesarias para relegar esos graves abusos al pasado.

Entre los métodos de tortura denunciados por los detenidos se encuentran la aplicación de descargas eléctricas en los genitales y otras partes del cuerpo, la asfixia parcial mediante la colocación de una bolsa bien apretada sobre la cabeza, golpes mientras el detenido permanece colgado en posturas contorsionadas, la privación de la comida, el agua y el sueño, y amenazas de violación o de que las mujeres de su familia serán detenidas y violadas. Las mujeres que son detenidas son especialmente vulnerables, y el informe cita varios casos de mujeres que han denunciado haber sido agredidas sexualmente bajo custodia.

“Irak permanece atrapado en un círculo de tortura e impunidad que debería haberse roto hace mucho”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui. “Ya es hora de que las autoridades iraquíes tomen las medidas concretas que se necesitan para afianzar una cultura de protección de los derechos humanos. Es algo que

deben hacer sin más rodeos ni demoras.”

Acercas de este informe:

El informe de Amnistía Internacional se basa en información recopilada de múltiples fuentes, entre ellas entrevistas con detenidos, familias de víctimas, refugiados, abogados, activistas de derechos humanos y otras personas, así como el examen de expedientes judiciales y otros documentos oficiales. Parte de esta información se obtuvo mediante investigación sobre el terreno en la región del Kurdistán, así como en una visita a Bagdad realizada el pasado mes de septiembre y en la que la organización se reunió con autoridades del Ministerio de Derechos Humanos y del Consejo Judicial Supremo. Amnistía Internacional envió sus últimas conclusiones al gobierno en diciembre de 2012, pero aún no ha recibido respuesta.

El informe estará disponible a las 00:01 GMT del 11 de marzo de 2013 en el siguiente enlace:

<http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE14/001/2013/en>